

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-3397-2020 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda deducida por el abogado señor Víctor Hugo Ramírez Valenzuela, en representación judicial y convencional de los demandantes José Domingo Oyarzún Céspedes, José Humberto Uribe Sandoval, Julio Edgardo Vera Solís, Rubén Leonardo Troncoso Ibáñez e Isidro Luciano Hidalgo Sepúlveda, por indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral en favor del demandante José Humberto Uribe Sandoval y Rubén Leonardo Troncoso Ibáñez, la suma de \$ 2.000.000 (dos millones de pesos) a cada uno; en favor de José Domingo Oyarzun Céspedes, la cantidad de \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos); y en favor de Julio Edgardo Vera Solís e Isidro Luciano Hidalgo Sepúlveda, la cantidad de \$ 9.000.000 (nueve millones de pesos) para cada uno.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, la confirmó con declaración que aumentó el monto a indemnizar a la suma de 30 millones de pesos (\$ 30.000.000), para cada uno de los demandantes.

Contra esa sentencia el Consejo de Defensa del Estado por la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:



Primero: Que, en cuanto al recurso de casación en la forma, el recurrente denuncia la infracción al artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, indica que atenta en contra de la unidad y congruencia procesales que se vienen de mencionar, como es evidente, la sentencia (de segunda instancia en este caso) que contempla decisiones contradictorias pues al hacerlo, rompe la ilación lógica que inspira a las reglas que vienen de invocarse, instaurando un vacío irremediable en aquél, pues dado que las decisiones de signo opuesto son evidentemente incompatibles entre sí, por simple aplicación de la regla lógica de exclusión, se desplazan unas a otras, destruyendo su potencialidad de sustentar una resolución jurisdiccional.

Añade que es precisamente, la situación que ocurre en la especie; que la sentencia de segunda instancia da por reproducida, íntegramente, la de la primera cuerda, de manera que ambas han de leerse como un solo todo continuo, ininterrumpido y congruente. Asentado que ha sido lo anterior, salta a la vista la discordancia en que incurrieron los jueces del segundo grado y que fue, precisamente, lo que les permitió concluir que habían de alzarse las indemnizaciones concedidas, pues no puede afirmarse simultáneamente, que la regulación de dichas reparaciones ha de atender las personales circunstancias de cada uno de los actores (tiempo de detención, pérdida del trabajo) y resolver, en definitiva, que los perjuicios infligidos son “similares” para todos, expresión esta que, por cierto, ha de entenderse muy cercana a la equiparación total, si se advierte que los valores que se terminan por sentenciar son, en realidad, idénticos.

Pide se invalide la sentencia recurrida por haber incurrido ésta en las infracciones de leyes procedimentales que se describen más arriba y dicte la



pertinente sentencia de reemplazo conforme a la ley, en cuya virtud se confirme sin declaración alguna la sentencia de primera instancia, con costas.

Segundo: Que el arbitrio intentado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, que establece, que “el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación dictadas, en lo que interesa para el presente caso, por Cortes de Apelaciones, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia”, naturaleza, que no comparte la resolución objeto del presente recurso, razón suficiente para que éste sea declarado inadmisibile de plano.

Tercero: Que de la sola lectura del arbitrio en análisis, surge que el mismo no cumple con los estándares formales exigidos para su interposición por el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que sostiene la recurrente, la sentencia impugnada habría incurrido en la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil. Afirma que el vicio denunciado se advierte en la existencia de consideraciones contradictorias, ya que la sentencia impugnada en lo resolutivo fijó un monto idéntico como indemnización ante situaciones fácticas diversas.

Cuarto: Que la decisión adoptada por el Tribunal no configura la causal invocada por el Consejo de Defensa del Estado. En efecto, el recurrente se refiere a la hipotética situación de contemplar el fallo impugnado una decisión imposible de cumplir porque es opuesta a otra, lo que no ocurre en la especie, toda vez que



básicamente contiene un pronunciamiento, a saber, condenar al fisco a pagar a cada uno de los demandantes la suma de 30 millones de pesos.

Quinto: Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir solo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa, por los siguientes motivos.

Sexto: Que, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber aumentado la indemnización por el daño moral padecido por las demandantes sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial.

Séptimo: Que los sentenciadores exponen las razones para aumentar el monto de la indemnización decretado, exponiendo que;

“Que atendida la naturaleza de las acciones de las que fueron víctimas los demandantes por parte de agentes del Estado de Chile, el evidente daño sufrido y la repercusión en la vida familiar y social de los actores, consecuencias de hecho que alteran todo el ciclo vital de los afectados, se estima que el perjuicio moral, en definitiva, es similar para todos, y que este no puede ser valorizado en una suma inferior a los \$30.000.000.- para cada uno de los demandantes”.

Octavo: Que, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias



definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al presente recurso–* en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

Noveno: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las



sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

Décimo: Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

Undécimo: Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH.



Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

Duodécimo: Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).



Décimo tercero: Que, al dictar la sentencia impugnada confirman la sentencia apelada con declaración que se aumenta el monto de la indemnización ordenada por daño moral a la suma de \$30.000.000, para cada uno de los demandantes, sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a aumentar el monto ordenado pagar al Fisco de Chile por el tribunal de primera instancia, lo que atendido la naturaleza de la impugnación formulada constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que para una adecuada resolución del asunto era imperativo analizar los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a cada uno de los demandantes en particular. La controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile con su actuar causaron al recurrente.

Décimo cuarto: Que, como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 768 n° 5, del Código de Procedimiento Civil, porque no acata la exigencia del literal N° 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.



Décimo quinto: Que las deficiencias anotadas no pueden subsanarse sino con la invalidación del fallo que la contiene, por lo que esta Corte, de oficio, procederá a anularlo, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa.

Décimo sexto: Que por lo expresado en las motivaciones anteriores y de acuerdo a lo que previene el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, se tendrá por no interpuesto el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante.

Y de acuerdo, además, con lo previsto en los artículos 764, 765, 766, 775 y 786 del Código de Procedimiento Civil, **se invalida de oficio**, la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Por lo decidido, **se tiene por no interpuesto el recurso de casación en la forma** deducido por la parte demandada.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 171801-2022

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:17

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:18



JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO

Fecha: 04/10/2023 14:14:19

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA

MINISTRO

Fecha: 04/10/2023 14:14:20

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ

MINISTRA

Fecha: 04/10/2023 14:14:20



EWXXXQPXJX

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casación que precede, se reiteran sus motivos octavo a décimo tercero.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

Primero: Que, la indemnización del daño producido y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo mandata la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de Derecho Internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Segundo: Que, una vez zanjado lo anterior, y para los efectos de la determinación del daño reclamado, es conveniente tener en cuenta que el daño moral consiste en la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de



precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. Como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 17.842-2019, de fecha 11 de octubre de 2019, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado.

Tercero: Que en este entendido, acreditados como han sido los hechos denunciados, el contexto en que se perpetraron y la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron, surge la efectividad del padecimiento del daño moral, de manera que el Estado debe reparar ese detrimento, por el hecho de sus agentes, cuya determinación concierne a la prudencia del tribunal, y no podría ser de otro modo porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que le provocaron al actor su detención y sometimientos a torturas y apremios ilegítimos.

Cuarto: Que, en el mismo sentido, es preciso argumentar que la indemnización de perjuicios por daño moral, no puede fijarse recurriendo únicamente a la prudencia de los juzgadores, los que deben observar la realidad de cada caso en particular y los montos que, en casos similares, se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los



órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia.

Quinto: Que apreciando las probanzas rendidas, relacionadas en los considerandos décimo tercero y décimo quinto del fallo que se revisa conforme las cuales se estableció en su considerando décimo sexto que;

“Respecto a José Domingo Oyarzun Céspedes, es posible acreditar que éste fue detenido en el mes septiembre de 1973 a la edad de 27 años, luego de su detención fue despedido de Enafri S.A donde se desempeñaba como coordinador campesino el 24 de octubre de 1973. Lo anterior, es posible acreditarlo con el certificado de nacimiento incorporado, la declaración de la testigo Bernarda Gutiérrez Cubillos, declaración que se encuentra en armonía con el finiquito, ya que la testigo refirió que el demandante habría perdido su trabajo luego de la detención y el finiquito es de un mes posterior a la misma. No se le da valor a la declaración de Daniel Díaz Vargas, el cual es impreciso en cuanto al año de detención y la duración de la misma.

Respecto a José Humberto Uribe Sandoval, además del hecho de ser reconocida su calidad víctima de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, es posible acreditar que nació el 11 de octubre de 1959, con el certificado de nacimiento.

Respecto a lo sucedido a don Julio Edgardo Vera Solís, es posible acreditar que a septiembre de 1973 tenía 23 años, que a esa fecha se desempeñaba como gendarme y fue traslado al norte donde paso 15 días detenido. Lo anterior se acredita con el certificado de nacimiento y la declaración de los testigos Luis Humberto Echeverría Cáceres y Julio Humberto Faundez Cáceres.

Además con el documento acompañado por la demandante intitulado Relación de Servicio, se acredita que el 27 de febrero de 1979 se aceptó su



renuncia al servicio, no desacreditándose el contenido del mismo con la declaración de los testigos, ya que éstos no fueron claros en cuanto a la baja del servicio, y si el demandante estimaba que el contenido del mismo no era verídico no se entiende la razón de la incorporación del citado documento.

Respecto de don Rubén Leonardo Troncoso Ibáñez, además del hecho de ser reconocida su calidad víctima de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, es posible acreditar que fue detenido en el año 1978, tenía 23 años, y estuvo 3 a 4 días detenido en la escuela de Artillería de Linares. Lo anterior, se acredita con el certificado de nacimiento y la declaración de los testigos Germán Edmundo Saavedra Cuevas y Franklin Aquiles Eliceo Carrasco Torres, ya que ambos son contestes en cuanto al año, lugar y tiempo de detención del demandante.

Respecto a don Isidro Luciano Hidalgo Sepúlveda, además del hecho de ser reconocida su calidad víctima de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, es posible acreditar que fue detenido el 22 de septiembre del año 1973, fecha en la cual tenía 26 años, y que estuvo detenido un mes detenido en el Estadio Nacional, luego de la cual perdió su trabajo en la óptica. Lo anterior, se acredita con el certificado de nacimiento y la declaración de los testigos Carlos Fernando Olivares y María Astorga Jara.”

Sexto: Que la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada *prudencialmente*, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino, por el contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes



y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

Séptimo: Que, llevado el análisis al caso de marras, es posible colegir que los montos indemnizatorios fijados en autos por concepto de daño moral en favor de los demandantes civiles, deben ser modificados, toda vez que la circunstancias fácticas de la detención de cada uno de los demandados y que son el sustento de la acción de cada uno de ellos, varían en cada caso, así no puede ponderarse como igual al momento de determinar el monto a indemnizar, una detención que duró un lapso de horas frente a otra que se extendió por cerca de un mes, al igual que los pesares sufridos por cada uno de los demandantes, de modo que teniendo presente los hechos asentados y que han sido reproducidos en el considerando quinto, se estará a ellos a fin de determinar el monto a indemnizar respecto de cada demandante, toda vez que como se ha venido indicando cada situación es diversa y debe ser ponderada conforme a los hechos efectivamente asentados.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10, 40 y 425 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se decide:

Se **confirma** la sentencia apelada de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Talca rol C-3397-2020, con las siguientes declaraciones;



Se condena al Fisco de Chile a pagar en favor del demandante **José Humberto Uribe Sandoval**, la suma de \$ 3.000.000 (tres millones de pesos); en favor de **José Domingo Oyarzun Céspedes y Rubén Leonardo Troncoso Ibáñez**, la cantidad de \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a cada uno; respecto de **Julio Edgardo Vera Solís**, la cantidad de \$ 10.000.000 (diez millones de pesos); y en favor de **Isidro Luciano Hidalgo Sepúlveda**, la cantidad de \$ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos).

Se confirma en lo demás la sentencia recurrida.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 171801-2022.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:22

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:23

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:23

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 04/10/2023 14:14:24

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 04/10/2023 14:14:25



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

